



Soledad Cazorla Prieto.

Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUSTICIA: IDEAS PARA UN FUTURO CERCANO.

I.- INTRODUCCIÓN

Ya estamos en el cuarto Congreso sobre la Violencia Doméstica y de Género, una convocatoria multidisciplinar que implica a los diferentes profesionales, asociaciones e Instituciones que luchan contra este fenómeno delictivo y que es fiel reflejo de los principios inspiradores de la Ley Integral 1/04, de 28 de diciembre: dar una respuesta global e integral desde aspectos tan diversos pero que confluyen en lograr la igualdad de las mujeres. Igualdad frente a los ataques injustos e injustificables de los que del maltrato hacen su “modus vivendi” sin entender que en el siglo XXI la sociedad no puede dar tregua a la discriminación – a ninguna- por ser mujeres y compartir afectos y que, un Estado social y democrático como predica nuestra Constitución, no puede, no sólo tolerar, sino que debe combatir estos ataques, erradicar la vulneración de los derechos fundamentales que están detrás de cualquier acto que se enmarca en la denominada violencia de género.

Prevenir, sancionar y eliminar esta forma anacrónica de violencia y prestar protección y asistencia a sus víctimas (mujeres y descendientes) son, en efecto, los objetivos que tienen que ver, de un modo u otro, con la dedicación y, me atrevería a decir vocación de todas las personas que hoy estamos reunidos para seguir andando este largo camino que nos debe conducir a la igualdad. El camino es largo, tortuoso acompañado de “inclemencias” no solo atmosféricas sino de toda índole, a modo de una carrera de fondo en la que cambiarán los participantes pero dando el “testigo” a otros que con el mismo ímpetu que nos acompaña a los actuales, servirán de acicate en el cambio y transformación de la sociedad que no se puede permitir atropellar los derechos de las que conformamos la mitad de la población.

Pero conviene recordar como ejercicio de aproximación al fenómeno que nos ocupa que combatir esta peculiar violencia no es tarea fácil. A la tutela tradicional a la que se venía sometiendo a las mujeres de obediencia jurídica al padre o esposo, junto con el papel de “cuidadoras” que se sobreentendía y se sobreentiende en la mujer, se nos une una batería de obligaciones que, sin ser congénitas han producido una huella tan honda que, en muchas ocasiones se llegan a culpabilizar las víctimas del extraño entramado que conforma la Violencia de Género y evitan el castigo del autor de estas conductas antijurídicas y culpables.

Por ello, conviene rememorar lo que desde la F.G.E. se nos indicaba a los representantes del Ministerio Público en orden a como se debía de actuar¹, exigiendo de los Fiscales: *“el mayor empeño en la persecución de las lesiones y malos tratos causados a las mujeres, y que suplieran con su investigación las deficiencias de prueba originadas por los naturales temores de las víctimas a comparecer en los procedimientos”*. Tal aseveración ya vaticinaba una de las cuestiones más singulares o propias de estos procedimientos penales que podríamos calificar como las consabidas reticencias o retractaciones de nuestras víctimas, apoyadas legalmente por la dispensa a no declarar o denunciar contempladas en los arts. 416, 707 y 261 de la L.E.crim. En estos supuestos que inciden, en la mayoría de los casos, en la absolución de los imputados, no culpabilicemos de ello a las víctimas que viven un drama personal y un calvario procesal (propio de cualquier enjuiciamiento criminal por delito) y reflexionemos sobre la necesidad de reformar esta excepción a la regla general de la obligación a declarar de los testigos y de interponer denuncias.

II.- REFERENCIAS AL II Y III CONGRESO DEL OBSERVATORIO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.

Granada y Madrid fueron las sedes que nos recibieron en estas precedentes convocatorias en las que, como Fiscal de Sala Delegada en la materia de Violencia sobre la Mujer, he tenido intervención directa. Coinciden ambos Congresos con la creación de esta Fiscalía de Sala Especializada que data de la entrada en vigor de la Ley Integral de 29 de junio de 2005².

Es de Justicia, y – ya que de eso tratamos- mencionar que, antes de la entrada en vigor de la L.1/04 de 28 de diciembre en la apertura del Año Judicial³, el Fiscal General del Estado hacía un pronunciamiento explícito sobre este tipo de delincuencia, no solo por el número de muertes que provoca, sino también porque los distintos comportamientos que integran esta categoría normativa: *“son un reflejo de una distorsionada concepción de las relaciones humanas, que hay que erradicar de nuestra sociedad, ya que con olvido de los valores constitucionalmente reconocidos como la dignidad y la igualdad de las personas se manifiestan en situación de dominación...”*, por ello se comprometía en tal solemne acto a que la persecución de estas conductas y la protección de sus víctimas constituyera una de sus prioridades en el quehacer del Ministerio Público y potenciar al máximo la actuación del Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y de las Secciones una vez fuera promulgada la Ley.

¹ Instrucción de la F.G.E 3/88, sobre “Persecución de malos tratos a personas desamparadas y necesidad de hacer cumplir las obligaciones alimenticias fijadas en los procesos matrimoniales”

² La L.O.V.G, regula la creación del Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer y sus funciones; las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer y los Delegados de la Jefatura en los arts. 70, 71 y 72. Ello, conllevó la modificación del Estatuto Orgánico del Mº Fiscal de 1981, añadiendo el art. 18 quater y, en el año 2007, nueva reforma del E.O.M.F en el art. 20, modificación producida por la Ley 24/07, de 9 de Octubre. Tal normativa es reproducción literal del art. 70 precitado. Sobre el funcionamiento de esta Fiscalía de Sala ver instrucción 7/2005 de la F.G.E. sobre “El Fiscal de Violencia sobre la Mujer y las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías”.

³ Discurso de Apertura del Año Judicial del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado (Cándido Conde Pumpido Turón), publicado en la Memoria de la FGE del mismo año.

Y arrancando de tal pronunciamiento y con la perspectiva del transcurrir de siete años, no fue tal aseveración un principio solo inspirador o programático de la actuación del Ministerio Público, sino una realidad⁴ que se ha plasmado a través de nuestras Circulares, Instrucciones y Consultas que proporcionan la unidad de actuación de nuestra Institución Constitucional ante los Juzgados y Tribunales y la seguridad jurídica de aquellas personas que acuden a los Órganos Jurisdiccionales porque son víctimas de estos actos delictivos. Y lo que a mi juicio es más importante, hemos hecho un verdadero esfuerzo en que –dentro de la complejidad que rodea el papel del acusador público en España- se nos visibilice la cara más amable y desconocida como defensores del interés social, -la faceta de protectores de las víctimas- y, de entre ellas de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos que padecen esta violencia⁵.

No creo que a nadie le quepa la más mínima duda de que “hoy por hoy” con la misma intensidad que el Fiscal busca el castigo del delincuente, lucha por la reparación del daño producido en el sujeto pasivo del delito, reparación que no puede quedar circunscrita solo a la indemnización económica por los daños sufridos sino a la reparación moral.

Recordando los Congresos celebrados en el año 2006 (23 y 24 de febrero), y de Octubre del año 2009 en esta misma Sede (días 20 y 21), llama la atención y es indicativo, como los temas debatidos inicialmente fueron estrictamente jurídicos abarcando fundamentalmente aspectos procesales y sustantivos de la que denominábamos “nueva Ley”. Era el momento de intentar poner orden e interpretar la Ley Integral después de la catarata legislativa iniciada en el año 1989 que constantemente reformaba parcialmente diferentes textos legislativos y, en poco espacio de tiempo reformaba nuevamente lo inicialmente reformado, lo que implicaba falta de sosiego y reflexión en los actores jurídicos del proceso y vaivenes interpretativos, vaivenes que todavía perduran ya que por diferentes motivos no hay un

⁴ Como ejemplo de la atención prestada por la FGE a esta enfermedad social, cabe reseñar: La Instrucción 1/88 sobre “Persecución de malos tratos a personas desamparadas...”; Circular 1/1998 sobre “Intervención del Mº Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar”; Circular 3/03 sobre: “Cuestiones procesales relacionadas con la Orden de Protección”; Circular 4/03 sobre: Nuevos instrumentos jurídicos en la persecución de la Violencia Doméstica”; Instrucción 4/04 sobre:” Protección de las víctimas y reforzamiento de las medidas cautelares en relación a los delitos de Violencia Doméstica”; Instrucción 2/05 sobre:” Acreditación del Mº Fiscal en las situaciones de Violencia de Género”; Consulta 2/06 sobre: “Prisión preventiva acordada en supuesto de malos tratos del art. 153 CP”. Y las más relevantes por su novedad e interpretación de preceptos sustantivos, procesales y organizativos, son: la Circular 4/05 sobre “Relativa a los criterios de aplicación de la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” y la Instrucción 7/05, ya reseñada.

A día de hoy, se espera la publicación del año 2011 que tratará en materia de Violencia de Género múltiples cuestiones jurídicas que han surgidas después de 6 años de la entrada en vigor de la Ley Integral. Dicha nueva Circular ya ha sido aprobada por la Junta de Fiscales de Sala que preside el Excmo. Fiscal General del Estado.

⁵ Resulta sorprendente leer en el discurso de apertura del Año Judicial de 1907, del entonces Fiscal General que hizo referencia al fenómeno que hoy centra nuestra atención en este Congreso. Resaltando: “*Hablar del crimen pasional para enmascarar estas infamias, hacer del asesinato de mujeres leyendas que ennoblece groseros sadismos y exalta honores canalleros –a la par que en ocasiones vindica honras conyugales, con letra de Calderón y Lope de Vega- es una gran vergüenza, reveladora de negligente indefensión social que pide a gritos rigores de Ley, inflexibilidades de Jueces, reparaciones de derecho, a cuyo amparo cuenten con verdaderas garantías la inocencia y seguridad de la mujer*”

entendimiento pacífico –jurídicamente hablando- de todo lo que se refiere a esta violencia.

Sin embargo, dos años después el panorama de temas a tratar se abrió a lo que la Ley predicaba como Ley multidisciplinar e integral (aunque nos seguían y nos siguen acompañando importantes problemas de interpretación del derecho). Así junto a los temas recurrentes sobre los denominados quebrantamientos consentidos, interpretaciones de las análogas relaciones de afectividad, elemento subjetivo de los tipos penales, etc...., se abren paso otras cuestiones de gran utilidad para profundizar sobre el papel que cada sector tiene que cumplir en la erradicación de esta enfermedad, coordinándose todos ellos a modo de eslabones de una cadena.

Esta evolución en los temas tratados en cada Congreso, es para mí, y creo que todos los Fiscales lo compartimos, un acertado camino porque el derecho es un remedio a este conflicto pero no es la solución ni la única solución ,si no ahondamos en el conjunto de medidas atinentes a la prevención del delito, como es el papel de la educación , de los medios de comunicación, de la sanidad y de las medidas de asistencia a las víctimas o a un profundo estudio de la valoración del riesgo y recuperación integral de las víctimas, etc.

Por ello, el año 2009 nos llevó a hablar de la educación, de la infancia, del riesgo, de la protección...

Este camino sin olvidar de ser útiles con las normas jurídicas y su interpretación es seguido por la Fiscalía General del Estado, apostando por el intercambio del conocimiento que otras disciplinas nos puedan aportar con el fin de conocer mejor a las víctimas y atender en la medida de nuestras competencias a sus expectativas⁶.

Porque la especialización que contempla y exige la Ley de Violencia de Género⁷ no se limita a la actuación de Jueces, Fiscales, Abogados que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. Especialización que viene impuesta no tanto por la complejidad técnico- jurídico de la materia, sino por la exigencia de una especial profesionalidad - sensibilidad ante el problema de esta singular violencia. Por ello todos los agentes que componen las diferentes disciplinas relacionadas con estos supuestos específicos deberíamos estar formados no solo en el derecho a aplicar, sea para buscar la protección de la víctima o el castigo del agresor, sino en la aproximación de otras materias extra jurídicas que nos ayuden a conocer y poder acertar en las decisiones que nos compete, según el papel profesional que debemos ejercer.⁸

⁶ En el último Seminario de Fiscales Especialistas en Violencia sobre la Mujer celebrado en Madrid los días 24 y 25 de Octubre del 2011 en la Sede de la Fiscalía General del Estado, Séptima reunión con participación de las/los Delegados en esta especialidad, junto con temas relacionados con la evolución jurisprudencial, proyecto de Circular, coordinación entre Fiscalías o personaciones en estos procedimientos participaron periodistas, psicólogos y lingüistas para buscar este necesario enfoque multidisciplinar.

⁷ Art. 2.1 L.O.V.G, art. 47 de la misma Ley que asegura una formación específica relativa a la Igualdad y no discriminación en razón de sexo y violencia.

⁸ Como ejemplo sería impensable que se implementara el protocolo de valoración-medico forense del riesgo en Violencia de genero cuyo objetivo es aportar un elemento que permita adoptar una decisión

III.- JUSTICIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Todos los juristas y todas las personas ajenas a esta ciencia que se puede definir como “un océano de dudas”, sabemos que determinadas conductas constituyen claras infracciones criminales, así: ¿quien ha discutido que los delitos contra la propiedad, las agresiones sexuales o los delitos que atentan contra la integridad física de las personas merecían un reproche penal y, en consecuencia una sanción? Nadie.

Así mismo, el desarrollo de las civilizaciones o las nuevas formas de ejercer prácticas incívicas del mundo “modernizado” por el desarrollo y por la tecnología nos descubren que hay que dar respuesta a nuevas actuaciones que merecen un castigo, - por mucho que el derecho penal parta del principio de intervención mínima como último reducto para intentar solucionar conflictos sociales e individuales-. Un ejemplo de ello es el reproche penal en caso de incendio forestales; los actos que afectan a la inmigración y que conculcan los más elementales derechos como seres humanos; la trata de personas; el tráfico ilegal de órganos; la delincuencia informática y sus diversos aspectos; los efectos de la seguridad vial...

Pero frente a esta normal evolución del derecho en donde la jurisdicción penal se va acoplando – aunque sea con retraso- a estos nuevos retos sociales, siempre han existido graves y vergonzosas conductas que no daban la cara, que eran conductas que merecían ser definidas como delitos pero permanecían invisibilizadas entre las cuatro paredes de “los hogares”⁹.

Es posible afirmar que el caso más espectacular respecto a ciertas áreas de la realidad a las que tradicionalmente no ha llegado la luz del derecho permaneciendo en la penumbra, aunque era sabido por la sociedad, haya sido el referido a la violencia sobre la mujer, y finalmente ha roto barreras y diques dando lugar a una nueva realidad legislativa y judicial, cuyo balance al menos si hay que juzgar el volumen de actividad que desplegamos y la actual receptividad social, nos llevará con mas tiempo a los resultados deseados que se contraen a mas igualdad entre hombres y mujeres, mas mujeres e hijos que inician un camino de autonomía sin miedo ni sumisiones, y menos mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas... y, digo bien, menos.

Pero no confundamos leyes con justicia, estos términos pueden ser antagónicos y lo han sido. Hay que desear que el conjunto de normas que conforman la legislación de un país sean normas justas, ya que el término esencial, pero abstracto de justicia es que es la primera virtud del derecho. Podemos encontrarnos con que rijan nuestra actuación como ciudadanía leyes e instituciones ordenadas y eficientes, pero si no son justas, han de ser reformadas y abolidas. Por tanto, en una

sobre la pertinencia y alcance de medidas de protección de la víctima y que no tuvieran estos profesionales una formación específica en violencia, al objeto de reconocer y valorar el riesgo.

⁹ Estos denominados “hogares”, no eran ni mas ni menos que huecos en los que por el silencio y anonimato, transcurría sin límites el miedo y el daño que algunas mujeres padecían en base a la tiranía que ejercía el hombre al que les unía una relación de afectividad presente o pasada.

sociedad justa no hay que permitir que los sacrificios o limitaciones de unos se justifiquen por las ventajas que obtienen otros¹⁰.

Llegados a este punto, habrá que reconocer que las leyes no fueron justas con las mujeres, ni lo fue, como consecuencia de ello, el derecho que se veía arrastrado por la tradición¹¹ que concebía a las mujeres en un plano subordinado al hombre y, la educación, que ha impedido durante siglos que nos acompañara la cultura, y por ello, la crítica y el pensamiento¹².

A día de hoy, y sin complejos podemos afirmar que las leyes han evolucionado en lo que se refiere al derecho fundamental que gira en torno a la igualdad, derecho reconocido en el art. 14 de la C.E. En suma se ha progresado en este valor que es la justicia. Buen ejemplo, es la Ley Integral en la que se asegura que estos delitos *“no son un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo de la desigualdad existente en nuestra sociedad”*. No obstante, frente a una buena ley nos enfrentamos con una tozuda realidad y, peculiar por las relaciones que unen al agresor y a la víctima que se escapan, en la mayoría de las ocasiones del específico ámbito jurídico- penal.

Pero la igualdad, como derecho antidiscriminatorio, no solo se cumple por la promulgación de la Ley Integral que es sectorial en base a esas agresiones que sufren las mujeres por las relaciones afectivas, ni por la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres¹³. La igualdad real y efectiva fundamento de la supresión de conductas antisociales y delictivas contra las mujeres se conquistan día a día, sin poder bajar la guardia, justificándonos en la existencia de leyes caducas, ni tampoco porque las leyes sean muy avanzadas y nos confiemos en que su promulgación y entrada en vigor supone automáticamente su

¹⁰ En este sentido se pronuncia John Rawls en su “Teoría de la Justicia”, editorial Fondo de Cultura Económica editado en español en 1979. Nos indica que las primeras virtudes de la actividad humana son la verdad y la justicia y éstas no pueden estar sometidas a transacciones.

¹¹ Las sufragistas en el siglo XIX nos enseñaban como la tradición o costumbres conservadas en el pueblo por transmisión de padres a hijos, nos han enseñado a las mujeres que la igualdad con los hombres en los asuntos de la vida es contraria a esa tradición, a los precedentes e incluso a siglos de educación. Por ello, advertían: *“las tradiciones, especialmente las culturales suelen ser muy malas para la salud. Quizás para los hombres la tradición reside en levantar piedras. Para las mujeres, es seguro que consiste en que nos las tiren a la cabeza.”*

¹² Ya en el Derecho Romano, -la cuna de nuestro derecho- se referían conceptos sobre el derecho de las mujeres que eran no solo injustos sino a día de hoy causan asombro. El Senador- Consulto Veieyano afirmaba que: *“la mujer por su propia debilidad, había de ser defendida contra sus propias irreflexiones, por lo que había que fortalecer la jefatura del marido garantizando su jefatura”*. En Francia en 1849, Jeanne Derooin, se postulaba para un escaño en la legislatura de la II República, a pesar de que las mujeres no podían ser designadas ni elegidas para puestos políticos. Ante tal propuesta el socialista Pierre Joseph Proudon, vilipendió su candidatura, con lo que debió pensar era la lógica del cuerpo: *“una mujer legisladora tiene tanto sentido como que el varón sea nodriza”*. Sobre ello, contestó la candidata: *“aceptaría sus argumentos si él le decía que órganos se necesitaba para ejercer como legisladora”*.

¹³ Ni por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; ni por la Ley 27/07 de 23 de octubre, por la que se reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; ni por la Ley 49/07 de 26 de diciembre, por la cual se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de personas con discapacidad, ni por el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y no discriminación.

metabolización por el conjunto de la sociedad. La igualdad como principio rector de la justicia es un ejercicio constante y difícil, ya que el día a día, nos demuestra que es más fácil asumir la falta de equidad en las relaciones interpersonales que estar vigilantes con “las gafas de igualdad” para que ésta no se resquebraje¹⁴

IV.- IDEAS PARA UN FUTURO CERCANO

El Congreso sobre Violencia doméstica y de género del 2009, ocupó parte de las ponencias inaugurales la cuestión referida a: Balance de aplicación de la Ley Integral en la Administración. Por parte de la Fiscalía se analizaron los pasos acometidos en cuanto a:

- La ESPECIALIZACIÓN como valor esencial de la Ley
- Coordinación Institucional entre todos los implicados
- Avance en la Protección de las víctimas a través de las medidas cautelares.¹⁵

Este año el objeto primordial de esta ponencia se centra en las ideas que se pueden aportar para ser eficaces en la radicación y prevención en la violencia sobre la mujer, pero excluyendo lo ya hecho (el pasado inmediato), y sin acudir al largo plazo que siempre es difícil de predecir al no contar con los parámetros de la evolución del fenómeno, o lo que es igual con la evolución de la sociedad a favor de la no discriminación, de la paridad y de la corresponsabilidad de hombre-mujer en su más amplio sentido: familiar, político y social.

La labor no es sencilla, pero es posible, por ello seguiré la idea de que “si es posible está hecho y si es imposible lo haré”¹⁶. Mi aportación solo es fruto de la experiencia y de la observación junto con la información que recabo de los 50 Fiscales Delegados en esta materia, que son las/ los que están “a pie de obra” y me transmiten sus éxitos, zozobras, problemas e inquietudes. Estas son:

1º.- Hay que huir de las tentaciones tendentes a una modificación de una Ley como la Ley Integral que lleva poco más de un lustro de diferencia. Eso solo sería improvisar, no valorar este texto normativo y no dejar que obtengamos sus frutos que

¹⁴ Echar la vista atrás en nuestro derecho penal del siglo XX, es una demostración de normas caducas que resumaban un concepto claro y nítido de desigualdad. La diferencia entre adulterio y amancebamiento es un ejemplo (art. 449 y 452 del CP). El adulterio se cometía cuando la mujer casada yacía con varón. El amancebamiento exigía algo más: “*tener la manceba dentro de la casa conyugal o, notoriamente fuera de ella*”. Para el hombre no bastaba la infidelidad, para ella era lo definitivo.

El uxoricidio (art. 428 CP), ¡ya es el colmo! dicho precepto decía en su primer apartado: “*el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjera lesiones de otra clase quedará exento de pena*”. Desde las Partidas, pasando por el Fuero Juzgo y Real sería tal excusa absolutoria derogada en el año 1961. Solo fue excluido de nuestros textos punitivos en el periodo comprendido de 1932 hasta 1944, año en que entra nuevamente en vigor.

¹⁵ En el año 2009 me referí en mi ponencia para examinar los logros conseguidos y las medidas que faltaban por implantarse, al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre del año 2006, por el que se aprobó un catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, a modo de “plan de choque” basado en cuatro objetivos: 1º. Aumentar la atención y la sensibilización; 2º. Reforzar los mecanismos oficiales y de protección judicial; 3º. Mejorar la coordinación de los profesionales que se dedican a la atención de las mujeres víctimas de la violencia y de los recursos de todas las administraciones y 4º. Conseguir la máxima inhibición de los maltratadores y agresores.

¹⁶ Este dicho coloquial que empleo en muchas ocasiones cuando se me plantea un asunto complejo en el que no se sabe bien el límite de la actuación, debe traer su origen en lo que, con posterioridad he leído de Víctor Hugo: “*mientras hemos hecho todo lo posible no hemos cumplido con nuestro deber*”.

requieren tiempo y esfuerzo, ya que no es fácil educar a nuestra juventud y reeducar a los que ya no lo son. Recordemos que: *“toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura, y, por el contrario, si se suceden y reemplazan frecuentemente pierden a la par del respeto que se las debe, su fuerza y autoridad”*¹⁷.

2º.- Hay que modificar la dispensa a no declarar o no denunciar, contempladas, según estemos en la fase preprocesal o procesal de un procedimiento penal en los artículos: 261, 416 y 707 L.E.Crim, preceptos del siglo XIX que provocan por múltiples razones, la impunidad de estas graves conductas delictivas. Deben ser matizadas, o lo que es igual, reformadas en los casos en que la testigo- denunciante sea víctima de los delitos cometidos por sus cónyuges o personas unidas por una análoga relación de afectividad (*“more uxorio”*), ya que como sujeto pasivo de estos actos antijurídicos y culpables no puede sustentarse tal excepción en razones de solidaridad familiar o esgrimir la inexigibilidad de otra conducta.

Aquellos que piensen que tal modificación se volvería en contra de las mujeres maltratadas cabe indicarles que por la complejidad de la relación entre víctima y agresor, llegados al Juicio Oral, nos encontramos con que ellas no se acogen al silencio procesal (dispensa a no declarar), sino que abiertamente niegan los hechos contenidos en su denuncia y exculpan al ofensor por razones como: venganza, celos,... La consecuencia es iniciar una causa criminal contra ella por acusación y denuncia falsa, y a día de hoy si hay otras pruebas de carácter incriminatorio independientes de la declaración de la testigo víctima que permitan enervar la presunción de inocencia, a pesar de la negación de los hechos por ella se ven involucradas en un delito de falso testimonio.

3º.- Hay que seguir avanzando en la protección de las víctimas, garantizando que cuando se deciden a denunciar unos hechos tan graves como tan tradicionalmente ocultados, van a contar con mecanismos eficaces de protección cautelar desde el primer momento en que se adopta tan valiente decisión. Dificilmente puede avanzarse en la superación de las cifras negativas en los casos de violencia de género si las medidas que eviten el riesgo de agresiones cualquier índole, no adquiere un rango superior a la tutela declarativa que resulte de una resolución firme del procedimiento¹⁸.

Pero, ahondar en la adopción de las medidas cautelares es perfeccionar las valoraciones de riesgo desde la primera comparecencia de la víctima ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas. Para ello se necesitan expertos o personal especializado en las sedes policiales y, posteriormente en las

¹⁷ Víctor Covián y Junco. Memoria de la Fiscalía General del Estado, año 1929. En el mismo sentido los juristas clásicos, nos indicaban a los juristas noveles que el derecho precisa de experiencia, observación y prudencia por a él se le confía la libertad y fortuna de sus semejantes.

¹⁸ Hasta ahora en el derecho procesal, la batalla de las garantías tenía un claro vencedor, el acusado; y un vencido evidente: la víctima. Sin embargo esta preterición consuetudinaria de la víctima, hoy esta superada y se trata no de buscar qué derechos predominan de unos frente a otros, sino de encontrar un equilibrio, no solo cuando se culmina el juicio de culpabilidad en una sentencia firme que otorga una reparación del daño a la víctima, sino en una fase previa que consolide la tutela cautelar como efectiva protección durante la tramitación de la causa penal. Estas palabras fueron las que pronuncié como Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer en la firma del Acuerdo para la Implantación del Protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género el 7 de julio del año 2009.

sedes judiciales. Recordemos que además de los indicios criminales para acordar la Orden de Protección, es necesario objetivar el riesgo que corre la víctima.

Junto con el objetivo de perfeccionar en la medida de lo posible el riesgo, hay que ser cautelosos y firmes en los supuestos en los que se acuerde la imposición de medios telemáticos de protección. Hay que hacer un seguimiento riguroso de aquellas incidencias que puedan ocurrir en los supuestos en que se impongan los dispositivos electrónicos, una vez acordada la medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima (arts. 57.2 y 48 CP). Eficacia no solo policial sino respuesta de jueces y fiscales cuando por la voluntad de los imputados hagan ineficaces estos dispositivos, cuidando de que en su implantación se hagan las advertencias legales para poder acusar, en su caso, por un delito de desobediencia, siempre que no sean un delito de quebrantamiento del art. 468.2 CP. Sin olvidar la opción de instar la prisión preventiva del acusado.

4º.- Hay que buscar un compromiso con los medios de comunicación tanto públicos como privados, para que reconociendo su papel protagonista –querido o no– en la educación de hecho de la sociedad (ya no son solo el eco de lo que se produce en la misma) para que, informativamente hablando traten bien y con rigor las noticias referidas a los malos tratos. No se trata de ocultar la información sobre estos reprobables actos sino de ser objetivos en la comunicación de la misma, huyendo del amarillismo y de las justificaciones frívolas ante estas conductas¹⁹. Lo mismo cabe decir de la publicación sexista que perdura.

5º.- Entiendo que la información que damos a las víctimas de violencia de género debe ser mejorada y, ello contribuirá a que tengan menos recelos a la hora de denunciar los hechos. Veamos como ejemplo, las modificaciones habidas en la Ley de Extranjería²⁰ en donde en casos de reagrupación familiar, se hace mención expresa a la posibilidad de que la cónyuge reagrupada o con relación análoga al matrimonio, víctima de violencia de género, pueda obtener el permiso de residencia y trabajo independiente.

De igual manera, en casos de víctimas extranjeras de violencia de género en situación irregular, ya no se incoa el expediente administrativo sancionador, pudiendo solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias especiales²¹.

6º.- Atención especial deben merecer los puntos de encuentro familiar en donde se desarrollan el régimen de visitas de las/los descendientes menores de edad con el progenitor no custodio²². Espacios neutrales para que se desarrollen las visitas con los

¹⁹ El Instituto Andaluz de la Mujer en el manual de “Como tratar bien los malos tratos, “informativamente hablando”, refleja un titular periodístico que rezaba: “*Las infidelidades amorosas de una mujer madrileña acaban en un intento de asesinato*”. En el periódico el Mundo, el 7 de abril de 2011, tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja sentimental, se publicó un artículo titulado “*Un chico normal*”. En el diario “El País” se titula una nueva muerte por violencia sobre la mujer con este titular “Un hombre se suicida después de haber dado muerte a su pareja” (se distorsiona el orden de los factores).

²⁰ Ley de Extranjería, arts 19, 17.4 y 34 bis. Modificaciones por L.O. 10/11.

²¹ En idéntico sentido no se da publicidad suficiente y adecuada a las modificaciones habidas en la Ley General de la Seguridad Social, Ley 26/09, de 23 de diciembre, sobre Pensión de viudedad a mujeres que puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en caso de separación y divorcio.

²² En cuanto a la protección social, económica y jurídica de la familia, ver art. 39.3 de la C.E. La Convención sobre los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, arts. 3.1, 9.1 y 9.3: “*Los*

descendientes, pero no neutros. Habrá que trasladar al Juzgado y a la Fiscalía todas las incidencias que surjan, pero para ello, habrá que actuar con personal especializado que pueda cumplir escrupulosamente la esencial función que tienen que desarrollar. Homogeneicemos funciones, especialistas, subvenciones y acerquemos estos centros a los pueblos, no solo a las capitales.

7º.- Hay que estar atentos a que cuando se dilucide la guarda y custodia de las/los menores, sobre todo cuando de guarda y de custodia compartida se trata, el Código Civil prohíbe tal posibilidad si uno de los progenitores está incurso en un procedimiento penal o cuando se adviertan indicios de violencia²³.

8º.- Habría que adaptar la Ley Enjuiciamiento Criminal a estas específicas violencias y someter a algún visado o control las renunciaciones de indemnizaciones por los daños y sufrimientos ocasionados a las víctimas, ya que nos encontramos asiduamente con pronunciamientos de las víctimas que renuncian a las indemnizaciones que corresponden por Ley.

9º.- Hay que buscar algún sistema para que una vez concluido el procedimiento penal podamos los que actuamos en el procedimiento de los hechos conocer la evolución de la víctima y su integración en la sociedad.

10º.- Hay que seguir concienciando a aquellos profesionales que trabajan en la sanidad, que ellos son, los que, en la detección precoz de actos de violencia sobre la mujer son esenciales y tienen una obligación específica y expresa de denunciar los hechos (art. 544 Ter L.E.Crim).

Frente a este decálogo de ideas tiene que haber un común denominador en la dedicación de todas las personas que combatimos esta enfermedad social: insistencia y tenacidad en el trabajo que nos incumbe.

Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.

²³ El art. 97.2 C.C establece que: “ No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal ya iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta de que las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

